

Venezuela: ¿epitafio para una revolución?

21 de enero de 2026



Por Luis Bonilla-Molina y Osvaldo Coggiola

No es ningún misterio que un único eslabón unifica los diversos escenarios de guerra, atropellos y masacres que recorren el mundo (Ucrania, Irán, Yemen, Venezuela, Palestina, Groenlandia, solo por citar los más evidentes), cuya fuerza motriz son las convulsiones del capital financiero norteamericano, circunstancialmente representado por el gobierno de Donald Trump. Las características patológicas del personaje no son una «anormalidad», sino un componente orgánico del fenómeno. Del mismo modo que las patologías bélicas y racistas de Hitler no fueron un accidente de la historia, sino la traducción, en clave alemana, de las necesidades apremiantes del capital alemán (que le prestó todo su apoyo), postergado en la carrera imperialista y derrotado en la Primera Guerra Mundial. Tampoco es un misterio que la pomposamente denominada «nueva estrategia nacional» (en realidad una mortal colcha de retazos mal hilvanada) de los EE. UU. desata todo tipo de contradicciones, efectiva o potencialmente violentas, con todos los demás componentes del otrora denominado «mundo globalizado», ya sean consideradas «adversarias», «enemigas» o incluso «aliadas». Menos atención llama el hecho de que las acciones o amenazas guerreristas del Zar de la Casa Blanca no prescinden, muy al contrario, de la política, es decir, de la explotación de las contradicciones políticas de amigos, aliados, competidores o adversarios. Si

la guerra es la continuación de la política por otros medios (y esta, como completaba von Clausewitz, «una expresión concentrada del comercio»), la política sigue presente en la guerra y determina su lógica concreta.

En los ataques letales contra embarcaciones venezolanas en el Caribe y en el secuestro de Nicolás Maduro, después de la retórica inicial pronto se pasó al comercio (el petróleo) y a instalar un «civilizado» mostrador de ventas de lo que está siendo tomado por los EE. UU. mediante la violencia. Trump declaró sin pelos en la lengua que, en la medida en que los EE. UU. poseen el ejército más poderoso del mundo, se sienten autorizados a hacer lo que desean o consideran justo, sin someter esa «justicia» a ninguna instancia, donde y contra quien quieran, manifestando desprecio contra los disidentes, incluso dentro de los propios EE. UU. Acto seguido amenazó a Colombia, México, Cuba, Irán, la UE (Groenlandia) y una vez más a Venezuela, si el nuevo gobierno no le obedece al pie de la letra.

En el caso de Groenlandia (perteneciente a Dinamarca, o sea, a la UE) portavoces de Trump reiteraron la posibilidad de una «compra» de la isla por los EE. UU. Trump está proponiendo alternativas que, de ser rechazadas por Europa, justificarían una escalada política y militar, como sucedió en Venezuela y como pretende hacer en Irán. Trump tiene a su disposición sanciones económicas, una posible devaluación del dólar y una división de la OTAN en la guerra de Ucrania contra Rusia. Naciones de la UE, preventivamente, anunciaron el envío coordinado de tropas a Groenlandia para una «misión de reconocimiento» liderada por las fuerzas danesas. Desde 1951, el Tratado de Copenhague autoriza a los Estados Unidos a enviar tropas a Groenlandia y a establecer bases militares en el país. El imperialismo norteamericano pretende instalar la Cúpula Dorada, un escudo antimisiles. La exigencia de Trump de anexionar Groenlandia saca a la luz la disputa imperialista con la Unión Europea y la preparación para una guerra contra

China.

La competencia con China se agudizó por el hecho de que este país posee monopolios en minerales y tierras raras en los más diversos países: miles de patentes y acceso preferencial a minerales en África y en América Latina, por ejemplo. En su expansión internacional, tejió una vasta red de financiamientos, infraestructura y suministros. Internamente, avanzó extraordinariamente en educación, ciencia, tecnología e innovación, transformándose en la segunda potencia económica del globo, la primera en términos industriales. Sus mercancías, sin embargo, como es obvio, necesitan mercados, y cada vez más en áreas sometidas al mayor o menor control de los EE. UU., cuyo poderío militar sigue en pie, y es usado contra el avance chino, buscando en última instancia desarticular su red comercial mundial, que incluye el mercado europeo y el latinoamericano.

El ataque norteamericano contra Venezuela cobra, en este contexto, su significado pleno. «Estamos en un nuevo momento político», es la expresión concisa con la que Delcy Rodríguez, presidenta interina, describe lo que está sucediendo en Venezuela. La intervención de los EE. UU., el bombardeo implacable que duró dos horas en Caracas, La Guaira y otros lugares, así como la mayor humillación de la historia de las Fuerzas Armadas nacionales, parecen recuerdos lejanos, a pesar de haber ocurrido hace apenas tres semanas. Los eventos del 3 de enero rápidamente se convirtieron en un acontecimiento histórico, digno de ser conmemorado en salas abarrotadas de activistas y para el público internacional que prefiere vivir en un mundo de fantasía porque eso sirve al propósito de sostener sus proyectos políticos nacionales.

El antiimperialismo está visiblemente ausente de la actual política venezolana. Aunque el grito de Chávez, «Váyanse al carajo, Yankees de mierda”, todavía resuena fuera del Palacio de Miraflores, en las últimas dos semanas los micrófonos del palacio presidencial fueron silenciados, indicando que

cualquier queja sobre los eventos del 3 de enero se hará exclusivamente por canales diplomáticos, en un intento de superar la mancha que eso causó en las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Venezuela. Mientras la perplejidad aún impregna la base social del régimen de Maduro, apenas en algunas reuniones militantes todavía se habla de criticar a los norteamericanos, y aun así, evitan mencionar al hombre en la Casa Blanca – una especie de consuelo para aquellos que comienzan a despertar del dolor de la pérdida.

La afirmación de Trump, hecha en la tarde del 3 de enero, cuando el llanto de madres humildes por la muerte de cien hijos aún resonaba por toda la patria sitiada, no puede ser refutada por los hechos: Delcy Rodríguez prometió cooperar y no repetir los errores de Maduro, que dismanteló, entre 2014 y 2025, el programa nacional-popular –por no mencionar el llamado socialismo del siglo XXI– personificado por Chávez, y no logró implementar plenamente las medidas políticas, legales e institucionales que habrían transformado a Venezuela en una nueva colonia americana. El error de Maduro no fue de principio, sino de cálculo político; él creía que podría negociar su permanencia en el poder a cambio de la venta de la riqueza del país a los Estados Unidos. Maduro cumplió la tarea de dismantelar una revolución fracasada, pero no supo cómo presentar su fin sin perder el apoyo de su audiencia. Eso no nos impide denunciar su secuestro el 3 de enero y exigir su liberación, porque Venezuela es una República que debe resolver sus asuntos sin la intervención de ningún imperio.

El 15 de enero, Donald Trump, que aprecia tanto el espectáculo de la lucha libre profesional que nombró a una empresaria del ramo, Linda McMahon, para el Departamento de Educación, decidió usar términos de los universos Marvel y DC para describir sus opciones políticas en Venezuela. Anunció que había tenido una larga conversación telefónica esa mañana con la presidenta interina Delcy Rodríguez, a quien describió como *fantástica* y con quien, según él, estaban trabajando muy

bien. Por la tarde, se reunió a puerta cerrada con la líder de la oposición de derecha, María Corina Machado, a quien había dispensado el 3 de enero debido al actual escenario político venezolano, pero a quien ahora se refería como *maravillosa* – claro, después de que ella le entregara la medalla del Premio Nobel de la Paz. Tal vez Trump quisiera sustituir la saga del «Super Bigote» y de «Cilita» por su retórica figurativa, refiriéndose a los muñecos creados por el gobierno de Maduro para representarlos, distribuidos como regalos de Navidad para niños pobres en Venezuela.

Pero, para ser justos, el término «fantásticas» es una etiqueta compartida para las cuatro figuras que, además de Delcy Rodríguez, están actualmente al mando de la administración venezolana: Jorge Rodríguez (Presidente de la Asamblea Nacional), Diosdado Cabello (Ministro del Interior y de Justicia) y Padrino López (Ministro de Defensa). Ellos son las cuatro «figuras fantásticas» del «nuevo momento político», que necesitan evitar irritar al Lex Luthor que reside en la Casa Blanca. El apodo de «Mujer Maravilla», sin embargo, es inseparable de María Corina Machado, que parece haberse distanciado del resto de la oposición venezolana, más inclinada a firmar acuerdos con Maduro y ahora con Delcy.

El proceso bolivariano llegó al 3 de enero de 2026 como un zombi alimentándose de retórica desprovista de cualquier fundamento, una caricatura terrible de las promesas hechas en la Constitución de 1999. El declive comenzó antes de las Medidas Coercitivas Unilaterales (sanciones de los EE. UU.), pero estas claramente aceleraron la transición de la entropía a la disolución contrarrevolucionaria, que se expresó de forma contundente en el paquete económico de 2018. Ese paquete transfirió los efectos de la crisis venezolana a la clase trabajadora, al mismo tiempo que garantizaba los circuitos de acumulación burguesa. El gobierno de Maduro se volvió autoritario, desmantelando incluso las libertades democráticas más básicas y creando despiadadamente las peores condiciones

materiales que cualquier trabajador venezolano haya experimentado jamás. Delcy Rodríguez y el «Cuarteto Fantástico» fueron componentes estructurales de ese declive; ellos no solo lo heredaron, sino que son sus coautores. La pregunta era si el ataque imperialista a Venezuela el 3 de enero podría servir de detonante para un movimiento revolucionario interno, liderado por el cuarteto gobernante, retomando el camino trazado en la Constitución Republicana de 1999.

Los eventos subsiguientes, infelizmente, destruyeron esa ilusión. No solo se están normalizando las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington en el ámbito de una agenda de restauración neocolonial, sino que también se están implementando las contrarreformas necesarias para consolidar el nuevo estatus de la relación entre los Estados Unidos y Venezuela. A petición de Delcy Rodríguez, la Asamblea Nacional simplificó las normas comerciales para eliminar las restricciones a la inversión extranjera, al mismo tiempo que inició reformas en la Ley de Hidrocarburos para legitimar el saqueo del petróleo venezolano y la entrada de empresas transnacionales expulsadas por la «revolución chavista». Esas medidas de restauración acelerada buscan alinear a Venezuela con las intenciones de Trump, presentadas a los dieciséis magnates del petróleo reunidos para crear un fondo de inversión de 100 mil millones de dólares. Ese fondo permitiría a los Estados Unidos aumentar su participación en el petróleo venezolano de casi un millón de barriles anuales a más de cuatro millones en apenas unos años.

En su encuentro con las mayores compañías petroleras del mundo, Trump dejó claro: «Ustedes negociarán con nosotros, no con Venezuela». Les ofreció el protectorado que impuso sobre el país para la gestión de futuros acuerdos petroleros. Mientras Trump se reunía con los magnates de los hidrocarburos, el Departamento de Estado anunció el envío de una delegación de funcionarios y técnicos a Caracas para

discutir, principalmente, la reactivación de las operaciones petroleras con las autoridades.

El secretario de Energía de los EE. UU., Chris Wright, con las maletas listas para Venezuela para negociar acuerdos de petróleo y minerales, declaró que busca garantizar acuerdos sobre petróleo crudo y minerales críticos para conceder a los EE. UU. acceso preferencial a esos recursos, además de ayudar a «financiar la reconstrucción económica de Venezuela». El secretario afirmó que espera un «aumento drástico» en la producción de petróleo venezolano hasta finales de 2026, impulsado por inversiones privadas, sin la necesidad de subsidios del gobierno norteamericano. Wright indicó que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano indefinidamente, depositando los fondos obtenidos en cuentas supervisadas. Para dejar claro quién está al mando, el director de la CIA, John Ratcliffe, estuvo en Caracas el viernes, 15 de enero, para una reunión con Delcy Rodríguez, con el objetivo de «construir confianza entre Washington y Caracas».

El presidente invasor pretende aumentar la oferta de petróleo para el mercado americano con el fin de reducir los precios de los combustibles y, así, aliviar la presión inflacionaria causada por la guerra comercial y por los aranceles impuestos por el propio Trump. Pero la caída en los precios del petróleo crudo pone en jaque nuevas inversiones en el sector: es previsible que las empresas petroleras regulen el aumento de la producción de acuerdo con sus propios apetitos, lo que demuestra la naturaleza explosiva de la transición política iniciada en Venezuela. Por la fuerza o por la «ley», los monopolios del petróleo y Trump están empeñados en un saqueo integral de los recursos y de la mano de obra venezolana. Pero los monopolios aún están lejos de un acuerdo sobre los medios políticos para alcanzar ese resultado, lo que revela una brutal lucha interna por los beneficios del saqueo planeado. El gobierno de Trump no conseguirá escapar de esas

contradicciones, que intenta gobernar por medio de métodos que no son una ficción democrática, aproximándose a un modelo bonapartista que gobierna internamente por decretos, un preludio para un régimen fascista.

Venezuela se está reintegrando totalmente al sistema bancario SWIFT, permitiendo que las transacciones financieras locales sean encaminadas por los Estados Unidos. Cuatro bancos privados (BNC, BBVA Provincial, Banesco y Mercantil) ya han sido autorizados por el gobierno de Trump a recibir una parte de la moneda extranjera que será transferida al país con la venta de petróleo. Por lo que todo indica, esos bancos privados serán los responsables de suministrar la moneda extranjera, y el Banco Central de Venezuela recibirá apenas los bolívares generados por esa subasta, deducidas las tasas de intermediación correspondientes.

Este mecanismo fue anunciado por Delcy Rodríguez como una forma de «cooperación energética con los EE. UU., que permitirá que cualquier moneda extranjera recibida sea destinada a dos fondos: el primero para protección social, buscando mejorar la renta de los trabajadores y fortalecer áreas como salud, educación, alimentación y vivienda, mientras que el segundo será asignado a infraestructura y servicios». Un simple cálculo del impacto de los primeros 300 millones de dólares a ser transferidos demuestra la eficacia limitada del 30% de los ingresos petroleros que los EE. UU. enviarán a Venezuela por medio de esta forma colonial de intermediación en la mejora de las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora.

El 9 de enero, la Casa Blanca ya había emitido la orden ejecutiva «Salvaguardando los ingresos petroleros venezolanos para el bien de los pueblos americano y venezolano» («*Safeguarding Venezuelan oil revenue for the Good of the American and Venezuela people*»), que personificaba la relación colonial en la gestión de los recursos derivados de la venta de petróleo. Los Estados Unidos asumieron el papel de

«guardianes» de los fondos venezolanos, cuyo uso y circulación dependerían del Secretario de Estado norteamericano, probando su aplicación con los 50 millones de barriles de petróleo que anunciaron que confiscarían para ese fin. La respuesta del gobierno liderado por Delcy Rodríguez fue iniciar reformas legislativas e institucionales para permitir su implementación. El 15 de enero, el mismo día de la reunión telefónica entre Delcy y Trump, fue anunciada la reforma de la Ley de Hidrocarburos de Venezuela. Como si estuviéramos presenciando una competición para parecer lo más obediente posible al ocupante de la Casa Blanca, mientras María Corina Machado entregaba a Trump la medalla del Premio Nobel, Delcy presentaba la reforma de la Ley de Exploración y Venta de Petróleo.

Como cortina de humo, el gobierno de Trump ordenó el cierre de El Helicoide, un centro de detención –denunciado como lugar de tortura– y la liberación de los presos políticos allí retenidos. El presidente de la Asamblea Nacional pasó de afirmar que Venezuela no tenía presos políticos a informar que más de cuatrocientos habían sido liberados y que los casos restantes estaban siendo revisados. Defensores de los derechos humanos habían indicado anteriormente que el número de presos políticos podría sobrepasar la cifra de mil. Es importante resaltar que esas liberaciones son resultado de la lucha librada por las familias de los presos políticos y por las organizaciones de derechos humanos que las apoyaron, y no una concesión imperial.

Esto ocurre mientras el Artículo 5º del decreto de Estado de Emergencia ordena la prisión de cualquier persona que critique al gobierno. Hoy, es común ver policías y militares en diversas partes de las ciudades venezolanas revisando celulares y deteniendo a cualquier persona con información contra el gobierno. La mayoría de las personas ahora sale de casa sin celular o con un aparato incapaz de recibir mensajes de WhatsApp o acceder a redes sociales. Por si eso no bastara,

el 15 de enero fue anunciado que los poderes ejecutivo y legislativo, junto con la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), alineada a los intereses patronales y orquestada por Maduro, acelerarían la reforma de la legislación laboral, creando un nuevo Código del Trabajo adaptado al nuevo clima político. La reacción de la burguesía y del sector empresarial aún está por venir. No obstante, Delcy Rodríguez es muy hábil transitando por los sectores empresarial, financiero y bancario. De hecho, entre 2018 y 2025, ella fue encargada por Maduro de encontrar puntos en común y dialogar con el sector empresarial tradicional, tarea que cumplió con eficiencia.

FEDECÁMARAS, central empresarial que participó en el golpe de Estado contra Chávez en 2002, había roto todo diálogo con el gobierno desde entonces. Pero los esfuerzos de Delcy Rodríguez lograron lo que parecía imposible: ella no solo se convirtió en la invitada de honor en los encuentros empresariales nacionales a partir de 2021, sino que también consiguió distanciarlos del llamamiento a la confrontación liderado por María Corina Machado. La experiencia de Rodríguez puede ser útil para alcanzar lo que Maduro no consiguió: un acuerdo entre las diversas facciones burguesas para una transición ordenada, donde todos los ricos ganan y nadie (rico) pierde. Está claro que, en tales acuerdos, los más pobres siempre salen perdiendo. Los cambios ocurren a un ritmo acelerado, mientras la perspectiva antiimperialista antes invocada parece estar desapareciendo cada vez más.

El público externo en general pregunta: «¿Y el pueblo? ¿Cuál es la respuesta popular?» La verdad es que no hubo ninguna manifestación de movilización masiva como respuesta espontánea y autónoma a lo que está sucediendo. Las tímidas marchas que ocurrieron fueron convocadas por el gobierno, movilizando principalmente a funcionarios públicos y a la base social que aún mantiene, la cual, aunque reducida, sigue siendo importante para esos fines.

¿Cómo explicar esto? El régimen de Maduro creó una situación tan desastrosa en las condiciones materiales de vida de los trabajadores que grandes segmentos de la población ven su salida como la única posibilidad de cambio. Los ciudadanos parecen estar dispuestos a dar una oportunidad a las circunstancias para mejorar los salarios, facilitar el retorno de los ocho millones de migrantes que desestructuraron a las familias venezolanas, restablecer el funcionamiento regular y estable de los servicios públicos (agua y electricidad) y establecer instituciones que atiendan las necesidades de salud, alimentación y vivienda de la gran mayoría. Sin embargo, es improbable que la administración de estilo colonial atienda esas aspiraciones, por tanto, el resurgimiento de un movimiento social movilizado solo será posible en la medida en que esa imposibilidad se haga evidente.

Por el momento, todo el mundo político habla de transición y de soluciones a corto plazo para los problemas. Pero eso no se resuelve solo con fuerza de voluntad; exige una comprensión integral de las causas estructurales y de los orígenes de la situación actual. La actual crisis venezolana tuvo su origen en febrero de 1983, con el colapso del modelo rentista de acumulación burguesa, el policlasismo y la representación política. Se profundizó con la escisión que supuso la desaparición del «pueblo» como categoría unificadora del Estado-nación tras el Caracazo de 1989, aún más exacerbada por la crisis dentro de las Fuerzas Armadas, expresada en los levantamientos del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992. A todo esto se suma la profunda crisis de credibilidad política con los resultados de las elecciones de 1993, un fenómeno que se intensificó en cada elección subsiguiente. Aunque la Asamblea Constituyente de 1999 haya obtenido apoyo mayoritario, no consiguió reconstituir al pueblo como sujeto del consenso estatal; por el contrario, el caos se profundizó, con picos y períodos de aparente estabilidad.

El surgimiento de una nueva burguesía en 2002, tras el golpe cívico-militar contra Chávez, desencadenó una lucha por la acumulación de riqueza que casi degeneró en guerra civil entre 2014 y 2017. Ese conflicto interburgués permanece sin solución y revela una tendencia a la negación de las estructuras multiclásticas, o sea, a la imposición política y la eliminación de las condiciones mínimas para una agenda social reformista, manteniendo, así, adormecidas las semillas de la revolución radical. A todo esto se suma el trauma de la pérdida de soberanía tras el ataque imperialista del 3 de enero y el papel vergonzoso de las fuerzas armadas. Son, por tanto, cuarenta y tres años de crisis estructural no resuelta en el modelo de acumulación y representación política. Una transición concebida desde la perspectiva de la clase trabajadora debe ser capaz de abordar cada componente de esta crisis. María Corina Machado afirmó que su enfoque es diferente, y el gobierno de Delcy Rodríguez está más interesado en mantenerse en el poder que en resolver esa crisis estructural. Los próximos meses serán cruciales.

El escritor cubano Leonardo Padura acaba de publicar una novela a la cual parece faltarle un capítulo sobre Venezuela. *Morir en la Orilla* narra la historia de la desilusión de una generación que criticó el capitalismo en función de los problemas políticos, económicos, sociales, culturales y tecnológicos, que abrazó el socialismo como alternativa y que ahora parece aceptar que la única solución para sus problemas es el retorno a un capitalismo salvaje de libre mercado, basado en la competición y en la explotación del trabajo, pero con un salario «digno».

Explicar que lo que sucedió en Venezuela no fue una experiencia socialista, sino una apropiación de la narrativa de la transformación radical, no es tarea fácil. El gobierno de Chávez terminó siendo una apuesta arriesgada en el intento de resolver la crisis capitalista sin alterar el modelo rentista de producción y acumulación. Una revolución solo es

posible y sostenible cuando encuentra resonancia en las expectativas, necesidades y demandas del pueblo. La tarea central ahora es defender la soberanía nacional con una postura antiimperialista desde la perspectiva de aquellos que viven de su trabajo; es decir, cada paso en defensa de la República debe ir acompañado de la reivindicación de la redemocratización de la sociedad venezolana y de la lucha por las condiciones de vida, en primer lugar, la lucha salarial. No hay soberanía territorial sin soberanía política.

No es posible plantear una defensa de la soberanía venezolana que omita la necesidad de superar la desigualdad y la falta de libertades políticas en Venezuela. Combinar esas demandas es el desafío del antiimperialismo hoy. El llamamiento a un frente antiimperialista global, basado en la solidaridad con la Venezuela agredida, debe ir acompañado de la lucha por la plena vigencia de las libertades políticas, sindicales y civiles en Venezuela. La lucha antiimperialista no amortigua, al contrario, acentúa la lucha de clases. La lucha antiimperialista y la lucha por la plena independencia y libertad política de la clase trabajadora no son contrapuestas: una presupone la otra y, sin ambas, no hay perspectiva de victoria en la lucha contra la transformación de Venezuela en un protectorado colonial de los EE. UU., que es el primer paso para la recolonización de América Latina en su totalidad. En los encuentros internacionales convocados para tejer una red mundial de solidaridad con la Venezuela agredida es necesaria una batalla política para que esa perspectiva sea el Norte de la movilización y de la acción política.